

Exp: 10-004183-0007-CO

Res. N° 2010-09418

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y tres minutos del veintiocho de mayo del dos mil diez.

Recurso de amparo interpuesto por AJCC, mayor, portadora de la cédula de identidad número 0-000-000; contra el PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE CON REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL AMBOS DE BAC SAN JOSÉ LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA.

RESULTANDO:

1.- En memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 08:55 horas del 23 de marzo de 2008, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Presidente y el Vicepresidente con representación judicial y extrajudicial ambos de BAC San José Leasing, Sociedad Anónima y manifiesta que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal le negó la posibilidad de otorgarle un préstamo personal, debido a que, supuestamente, tiene una operación pendiente con el BAC San José, lo cual asegura no es cierto (ver folio 3 del expediente). Señala que le indicaron que no se procederá con su trámite hasta tanto su historial crediticio quede sin pendientes, pese a lo cual en el BAC San José le dijeron que debe esperar para la eliminación de la supuesta operación ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (ver folio 2 del expediente). Considera violentados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- En atención a la audiencia conferida se apersona JGCB, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad BAC San José Leasing Sociedad Anónima y de la sociedad Banco BAC San José Sociedad Anónima (folio 0015) y manifiesta que no tiene conocimiento personal sobre los hechos, ya que se trata de hechos que fueron tramitados por colaboradores de esa empresa y no directamente por su persona, por lo que rinde el informe basándose en las referencias que tiene del caso y en la documentación que ha tenido para su estudio. Señala que efectivamente se dio un reporte de parte del Banco San José al centro de Información Crediticia, reporte que efectivamente es erróneo, debido a un traslape de los números de operación, ocasionado por los números cifrados que se utilizaban antes para reportar las operaciones de tarjetas, error que está en trámite de corrección y del cual se emitió un comunicado a la interesada sobre el tema y que aún y cuando existió el error por parte de ese Banco, el mismo se encuentra en proceso de corrección según los mecanismos normativos existentes para ello en el Reglamento de la Central de Información Crediticia pero estima que la recurrente no acata el debido proceso existente para esos casos sino que directamente presenta el amparo, sin utilizar los mecanismos existentes para enmendar el error cometido.

Indica que posiciones como la señalada por la recurrente ya han sido conocidas por la Sala, la cual ha dictaminado que no se trata de un asunto constitucional, dado que hay normativa especial, en la que se regula lo concerniente a la información de los deudores, y la misma contiene los remedios necesarios para cuando hay un error en la información. Estima que el caso concreto se trata de una cuestión de legalidad y no de constitucionalidad. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,

CONSIDERANDO:

I.- HECHOS PROBADOS.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que la amparada solicitó al Departamento de Crédito Operacional del BAC San José aclaración sobre la información que maneja esa entidad financiera a su nombre (hecho incontrovertido); b) que en vista de la solicitud de la amparada, el Departamento de Crédito Operacional del BAC San José emitió el oficio de fecha 22 de marzo de 2010, según el cual “En el Reporte Crediticio para la Entidad con Autorización No. GEN-00113885-2009 a su nombre, se reportan las operaciones # 632149259 y # 632149259100 la cual no le corresponde. Por lo anterior hacemos de su conocimiento que ya se inició el proceso de eliminación de la operación reportada ante la SUGEF” (ver manifestaciones rendidas a folio 0015 y folios 002 y 003 del expediente).

II.- HECHOS NO PROBADOS.- Ninguno de relevancia para la resolución de este asunto.

III.- OBJETO DEL RECURSO.- La recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, en particular los contenidos en el artículo 24 constitucional, en virtud de que el Banco BAC San José Sociedad Anónima envió una información errónea a la Superintendencia General de Entidades Financieras acerca de su comportamiento crediticio, el cual le perjudica financieramente, ya que presuntamente tiene una operación pendiente con ese Banco, lo cual, según afirma, no es cierto y que aunque solicitó la rectificación de esa información y se le indicó por escrito que efectivamente había un error en la información y que ya se inició el procedimiento para la eliminación de la operación ante la SUGEF, aún el trámite no se ha concluido.

IV.- SOBRE EL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO.- Tratándose de acciones de amparo dirigidas contra sujetos privados, dispone el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que esta clase de recursos procede contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso concreto, efectivamente se constata una situación de poder jurídico frente a la amparada por parte del Banco BAC San José Sociedad Anónima. El Banco BAC San José Sociedad Anónima, como entidad financiera privada, tiene bajo su custodia información financiera e incluso personal de la amparada, con lo cual es claro que la aquí tutelada, está ubicada en una posición jurídica de sumisión ante el manejo que de esa información haga la entidad financiera, que hace poco eficaces y céleres los remedios procesales previstos en el derecho común. Así las cosas, de conformidad con lo establecido en los artículos 48 de la Constitución Política y 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el presente recurso debe ser admitido para su análisis en contra de la entidad financiera demandada.

V.- SOBRE EL DERECHO DE INTIMIDAD, PRIVACIDAD Y A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA.- La Sala ha reconocido con anterioridad, que la ampliación del ámbito protector del derecho a la intimidad surge como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa en el que vivimos. Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales,

para evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas herramientas, que permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. Es reconocido, así, el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a la cual esa información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho también a que la información sea rectificadora, actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta o esté siendo empleada para un fin distinto del que legítimamente puede cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede al ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los objetivos que con este se pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, corrección o eliminación en caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo. Al respecto, mediante sentencia número 8996-02 de las 10:38 horas del 13 de setiembre de 2002, este Tribunal estableció, claramente, cuales han de ser las reglas que deben cumplirse a fin de garantizar el respeto y la protección de datos. En este sentido dispuso:

“(…) IV.- Principios básicos para la protección de datos. Ya este Tribunal, en la sentencia 5802-99 de las 15:36 horas del 27 de julio de 1999, citada supra, se refirió a los lineamientos que debe establecer la legislación que regule el tratamiento automatizado de datos personales. A falta de ella, la Sala estima procedente insistir en esas reglas a fin de que se consideren principios básicos para la protección de datos. Entre los fundamentales están:

1.- El derecho de información en la recolección de datos. Las personas a quienes se soliciten datos de carácter personal deberán ser previamente informadas de modo expreso, preciso e inequívoco directamente o por apoderado con poder o cláusula especial; las personas jurídicas por medio de su representante legal o apoderado con poder o cláusula especial

1. De la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

2. Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se les formulen.

3. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

4. De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación y confidencialidad.

5. De la identidad y dirección del responsable del fichero. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recolección, figurarán en los mismos en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

2. El consentimiento del afectado. Otro principio de capital importancia es el consentimiento del afectado, según el cual, el titular de los datos deberá dar por sí o por su representante legal o apoderado, el consentimiento para la entrega de los datos, salvo que la Ley disponga otra cosa dentro de límites razonables. Es obvio que el consentimiento podrá ser revocado, pero la revocatoria no producirá efectos retroactivos.

3.- La Calidad de los datos. Sólo podrán ser recolectados, almacenados y empleados datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades legítimos para que se han obtenido.

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado o manual no podrán utilizarse para finalidades distintas de aquellas para que los datos hubieren sido recogidos.

Dichos datos serán exactos y puestos al día, de forma que respondan con veracidad a la situación real del afectado.

Si los datos de carácter personal registrados resultaren ser inexactos en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificadas, actualizados o complementados. Igualmente serán cancelados si no mediare un consentimiento legal y legítimo o estuviere prohibida su recolección.

Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser pertinentes o necesarios para la finalidad para la cual hubieren sido recibidos y registrados.

No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado en un período que sea superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieren sido recabados o registrados.

Serán almacenados de forma tal que se garantice plenamente el derecho de acceso por el afectado.

Se prohíbe el acopio de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

Se prohíbe registrar o archivar juicios de valor.

Se prohíbe tener sobre una persona más datos que los necesarios a los fines del fichero.

4.- Prohibición relativa a categorías particulares de datos. Los datos de carácter personal de las personas físicas que revelen su origen racial, sus opiniones políticas, sus convicciones religiosas y espirituales, así como los datos personales relativos a la salud, vida sexual y antecedentes delictivos, no podrán ser almacenados de manera automática ni manual en registros o ficheros privados, y en los registros públicos serán de acceso restringido.

5. - El principio de seguridad de los datos. El responsable del fichero deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

No se registrarán datos de carácter personal en ficheros automatizados que no reúnan las condiciones que garanticen plenamente su seguridad e integridad y los de los centros de tratamientos, equipos, sistemas y programas.

El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del proceso de recolección y tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional.

6.- Reglas para la cesión de datos. Los datos de carácter personal conservados en archivos o bases de datos públicos o privados, sólo podrán ser cedidos a terceros para fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario,

con el previo consentimiento del afectado. Lo independientemente de la titularidad pública o privada del fichero. El consentimiento para la cesión podrá ser revocado pero la revocatoria no tendrá efectos retroactivos.

7.- Derechos y garantías de las personas. Cualquier persona puede:

Conocer la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de carácter personal, sus finalidades principales, así como la identidad y la residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad o sujeto particular encargado del fichero.

Obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos, la confirmación de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos, así como la comunicación de dichos datos en forma inteligible.

Obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos y su actualización o la eliminación de los mismos cuando se hayan tratado con infracción a las disposiciones de la presente Ley.

La autoridad o el responsable del fichero deben cumplir con lo pedido gratuitamente y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco días contado a partir de la recepción de la solicitud.

8.- El derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información garantiza las siguientes facultades del afectado:

A acceder directamente o conocer las informaciones y datos relativos a su persona.

A conocer la finalidad de los datos a él referidos y al uso que se haya hecho de los mismos.

A solicitar y obtener la rectificación, actualización, cancelación o eliminación y el cumplimiento de la garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales.

Para obtener en su caso la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados en su persona o intereses debido al uso de sus datos personales.

9.- Excepciones y restricciones al derecho a la autodeterminación informativa del ciudadano. Sólo por ley se podrán establecer excepciones y restricciones en los principios, derechos y garantías aquí enunciados, siempre que aquellas sean justas, razonables y acordes con el principio democrático. Las mencionadas excepciones y restricciones solo podrán plantearse para alcanzar fines legales en alguno de los siguientes campos:

La protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, de la seguridad económica del Estado o para la represión de las infracciones penales.

La protección de las propias personas concernidas, así como los derechos y libertades de otras personas.

El funcionamiento de ficheros de carácter personal que se utilicen con fines estadísticos o de investigación científica, cuando no existe riesgo de que las personas sean identificadas.

Siempre existirá recurso para que la autoridad judicial decida si en un caso concreto estamos ante una excepción o restricción razonable (...)"

En virtud de lo expuesto, puede decirse que el derecho de autodeterminación tiene como base la transparencia de los datos, el de correspondencia entre los fines y el uso

del almacenamiento y empleo de la información; el de exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos guardados; de prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, creencias religiosas, afinidad política, preferencias sexuales, dirección exacta, entre otras) por parte de entidades no expresamente autorizadas para ello; y de todos modos, el uso que de la información se haga debe ser acorde con lo que con ella se persigue.

VI.- SOBRE EL FONDO.- En el caso bajo estudio, se tiene que en la base de información de datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, aparece el registro de la recurrente con una operación que no le corresponde, siendo que el dato es inexacto y erróneo; sin embargo y a pesar de que el recurrido acepta en su informe que la información es inexacta y que indicó a la amparada que inició el proceso de eliminación de la operación reportada a la SUGEF erróneamente, a la fecha en que se rinde el informe de ley, no había procedido de conformidad. En razón de lo anterior, el recurrido le atribuyó a la amparada una información financiera que no solo no le corresponde sino que también le afecta financieramente. De lo esbozado en los puntos anteriores, se colige que todas las personas tienen derecho a desarrollarse dentro de una esfera de autonomía, que incluye la tranquilidad dentro de ese espacio y por ende un límite para los demás. A efecto de dar cobertura al derecho a la intimidad es que nace el derecho de autodeterminación informativa, que busca garantizarle al ciudadano el acceso a decidir las circunstancias particulares en las que otros tendrán acceso a sus datos personales a efecto de que pueda ejercer el control correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo afecta. En ese sentido, cualquier limitación que se haga al goce y disfrute del derecho a la intimidad, debe ser contenido en una Ley emanada del Legislador con todos los requisitos que ello implica. Ello se maximiza si se toma en consideración que el manejo de la información crediticia puede incidir en el ejercicio de otros derechos y el desarrollo de la actividad económica de las particulares. Así, las normas que contemplan el manejo de dicha información, deben ser interpretadas en forma restrictiva, a efecto de no limitar más de lo estrictamente necesario el disfrute del derecho a la intimidad y sus derechos correlativos. De esta manera, la autorización que el Legislador le otorgó a las entidades financieras a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras, debe entenderse limitada a la sistematización y recopilación sobre informaciones crediticias verídicas y exactas y que de ninguna manera le causen perjuicio ilegítimo al deudor. Es claro que el Banco accionado no ha procedido a la corrección, eliminación o rectificación, según sea el caso, de la información errónea que sobre la tutelada envió a la SUGEF, en detrimento de sus derechos fundamentales, la cual le ha afectado y limitado seriamente el ejercicio de su actividad económica, pues producto de esa información errónea, no es considerada por entidades bancarias o comerciales a efecto del eventual otorgamiento de un crédito o préstamo. Así las cosas, lo procedente es estimar el recurso, con las consecuencias que de seguido se dirán.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a JGCB, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad Banco BAC San José Sociedad Anónima, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, proceder INMEDIATAMENTE a la corrección, eliminación o rectificación, según sea el caso, de la información errónea que sobre la tutelada AJCC, cédula de identidad número 0-000-000 envió a la Superintendencia General de Entidades Financieras en relación con la operación número 632149259100. Se advierte a JGCB, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad Banco BAC San José Sociedad Anónima, o a quien en su

lugar ejerza ese cargo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliera o no la hiciera cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Sociedad Banco BAC San José Sociedad Anónima al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en vía civil. Notifíquese esta resolución a JGCB, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad Banco BAC San José Sociedad Anónima, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal.